

TEMA 1.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: PRINCIPIOS GENERALES, ESTRUCTURA Y CONTENIDO. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. LA CORONA. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY. LAS CORTES GENERALES. LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES.

1. **¿Cuál de las siguientes no puede considerarse una característica de nuestra Constitución?**
 - a. Consensuada.
 - b. Ambigua en su contenido.
 - c. Flexible.
 - d. De origen popular.

2. **La rúbrica del Título IX de la Constitución es:**
 - a. Del Poder judicial.
 - b. Del Tribunal Constitucional.
 - c. Economía y Hacienda.
 - d. De la Organización Territorial del Estado.

3. **La Constitución Española fue sancionada por el Rey... y entró en vigor:**
 - a. El 28 de Diciembre de 1978 y el 28 de Diciembre de 1978, respectivamente.
 - b. El 27 de Diciembre de 1978 y el 29 de Diciembre de 1978, respectivamente.
 - c. El 28 de Diciembre de 1978 y el 30 de Diciembre de 1978, respectivamente.
 - d. El 28 de Diciembre de 1978 y el 31 de Diciembre de 1978, respectivamente.

4. **Según el artículo 1.2 de la Constitución “la soberanía nacional reside en...”:**
 - a. Las Cortes Generales.
 - b. El Rey.
 - c. El Gobierno.
 - d. Ninguna de las respuestas es correcta.

5. **El artículo 9.3 de la Constitución garantiza, entre otros, los siguientes principios, excepto uno:**
 - a. Jerarquía normativa.
 - b. Publicidad de las normas.
 - c. Seguridad jurídica.
 - d. Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

6. **La exposición de los motivos que impulsan la norma constitucional así como los objetivos que la misma pretende alcanzar se encuentran contenidos:**
 - a. En el Título Preliminar.
 - b. En el Título Segundo.
 - c. En el Título Sexto.
 - d. En el Preámbulo.

7. **¿Cuál de las siguientes es la rúbrica correspondiente al Título VII de la Constitución?**
 - a. De las Cortes Generales.
 - b. Economía y Hacienda.
 - c. Del Poder Judicial.
 - d. De la Organización Territorial del Estado.

8. **La imposibilidad de que una ley sancionadora no favorable o restrictiva de derechos se aplique a hechos producidos con anterioridad a su entrada en vigor se conoce con el nombre de:**
 - a. Irretroactividad.
 - b. Seguridad jurídica.
 - c. Analogía.

- d. Jerarquía normativa.

9. La Constitución Española tiene:

- a. 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
- b. 144 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.
- c. 144 Artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
- d. 169 Artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.

10. Uno de los siguientes no constituye un valor superior del ordenamiento jurídico español, según el Art. 1.1 de la Constitución:

- a. La libertad.
- b. El pluralismo social.
- c. La igualdad.
- d. La justicia.

11. España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho. Ello significa que:

- a. Es únicamente una definición sin valor normativo alguno.
- b. No hay diferencia entre un Estado Social y otro Liberal.
- c. Supone el reconocimiento de unos fines a los que el Estado ha de atender, con sometimiento a la Ley.
- d. Supone la elección del Poder Legislativo por sufragio universal.

12. La Constitución, respecto de los medios de comunicación social escritos dependientes del Estado:

- a. Dispone su total desaparición a la entrada en vigor de la Constitución.
- b. Dispone su desaparición paulatina sin fijar plazo para ello.
- c. Permite su existencia.
- d. Dispone su desaparición paulatina en el plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Constitución.

13. Las bases de la organización militar se regularán por:

- a. Ley.
- b. Ley Ordinaria.
- c. Ley Orgánica.
- d. Decreto-Ley.

14. La familia, en la Constitución Española:

- a. Es reconocida como célula primaria y natural de la sociedad.
- b. No tiene mención alguna en el texto constitucional.
- c. Será objeto de protección por los poderes públicos.
- d. Es definida como institución moral y protegida especialmente por la legislación del Estado.

15. La Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales el:

- a. 6 de Diciembre de 1978.
- b. 27 de Diciembre de 1978.
- c. 29 de Diciembre de 1978.
- d. 31 de Octubre de 1978.

16. Las asociaciones secretas:

- a. Estarán permitidas si así lo dictamina el Ministerio del Interior.
- b. Están prohibidas constitucionalmente.
- c. Estén permitidas si son de carácter religioso.
- d. Estén permitidas si son de carácter militar.

17. Los derechos y deberes fundamentales se encuentran regulados en el Título I de la Constitución que contiene:

- a. Los artículos 14 a 38.
- b. Los artículos 10 a 55.
- c. Los artículos 15 a 29.
- d. Los artículos 1 a 9.

18. La cláusula general derogatoria que establece la Constitución supone que:

- a. Todas las Leyes Orgánicas y de rango inferior anteriores quedan derogadas y privadas de valor jurídico alguno.
- b. Las disposiciones anteriores que sean contrarias a lo que establece la Constitución quedan derogadas y carentes de valor jurídico alguno.
- c. El Gobierno puede derogar y estimar carentes de valor jurídico cualquiera de las leyes anteriores a la entrada en vigor de la Constitución.
- d. Las Leyes anteriores a la entrada en vigor de la Constitución, que no hayan sido derogadas expresamente, conservan plenamente su vigencia.

19. Según la Constitución Española, los poderes del Estado emanan de:

- a. El pueblo.
- b. La Corona.
- c. El Gobierno.
- d. Las Cortes Generales.

20. El derecho de libertad sindical:

- a. Comprende la afiliación obligatoria en determinados supuestos a un Sindicato.
- b. No comprende el derecho de los Sindicatos a formar confederaciones.
- c. Comprende el derecho de los Sindicatos a fundar Organizaciones Sindicales Internacionales.
- d. No comprende el derecho de los Sindicatos a afiliarse a Organizaciones Sindicales Internacionales.

21. La forma política del Estado español es:

- a. La Monarquía presidencialista.
- b. La Democracia parlamentaria.
- c. La Monarquía parlamentaria.
- d. La República.

22. La regulación del procedimiento de “habeas corpus” se lleva a cabo por:

- a. Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre.
- b. Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.
- c. Ley 62/1978, de 28 de diciembre.
- d. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.

23. El español de origen podrá ser privado de su nacionalidad:

- a. En los casos específicamente señalados por la ley.
- b. En el supuesto de comisión de delitos.
- c. Por actos de terrorismo.
- d. En ningún caso.

24. Los españoles tienen derecho a participar en los asuntos públicos:

- a. Únicamente a través de sus representantes.
- b. Únicamente a través de los partidos políticos.
- c. Directamente o a través de sus representantes.
- d. Únicamente a través de los partidos políticos o sindicatos.

25. Señale la afirmación correcta en relación con la pena de muerte:

- a. Según el art. 15 de la Constitución queda abolida la pena de muerte incluso en tiempos de guerra.
- b. En la actualidad, no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico ni siquiera en tiempo de guerra.
- c. Según el art 15 de la Constitución queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales.
- d. El Código Penal podría establecer la pena de muerte para delitos de extrema gravedad, a tenor de lo establecido en el art. 15 de la Constitución.

26. La reforma constitucional se encuentra regulada:

- a. En el Título VIII de la Constitución.
- b. En la Disposición Derogatoria de la Constitución.
- c. En el Título VII de la Constitución.
- d. En el Título X de la Constitución.

27. El pluralismo social se manifiesta con la existencia de:

- a. Partidos políticos.
- b. Sindicatos.
- c. Asociaciones empresariales.
- d. Las respuestas b) y c) son correctas.

28. La necesidad de que el ciudadano sepa, en todo momento, si una conducta está sancionada, incentivada o es indiferente para el derecho constituye el principio de:

- a. Jerarquía normativa.
- b. Seguridad jurídica.
- c. Publicidad de las normas.
- d. Responsabilidad de los poderes públicos.

29. Según el Art. 8.1 de la Constitución, ¿quién tiene como misión garantizar la soberanía e independencia da España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional?

- a. El Gobierno.
- b. El Rey.
- c. Las Fuerzas Armadas,
- d. El Defensor del Pueblo.

30. La libertad de creación de centros docentes se reconoce:

- a. A las personas físicas y jurídicas.
- b. A las personas físicas exclusivamente.
- c. A las personas jurídicas exclusivamente.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

31. ¿En qué artículo de la Constitución se reconoce el derecho de reunión?

- a. En el Art. 17.
- b. En el Art. 19.
- c. En el Art 21.
- d. En el Art. 23.

32. El Título Preliminar y el Título Primero de la Constitución contienen la parte de la misma que se denomina:

- a. Parte Dogmática.
- b. Parte Orgánica.
- c. Preámbulo.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

33. La Constitución entró en vigor:

- a. Al día siguiente de su publicación en el B.O.E.
- b. El mismo día de su publicación en el B.O.E.
- c. A los tres días de su publicación en el B.O.E.
- d. A los tres meses de su publicación en el B.O.E.

34. Los principios generales sobre los que la Constitución pretende establecer el orden social, político, institucional y territorial del Estado se encuentran contenidos en el/las:

- a. Preámbulo.
- b. Título Preliminar.
- c. Título Primero.
- d. Disposiciones Adicionales.

35. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a. El Jefe del Estado Español es el Rey.
- b. El Presidente del Gobierno tiene la facultad de disolver las Cámaras.
- c. La condición de parlamentario es incompatible con un cargo en el Gobierno.
- d. Además del castellano, las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

36. Los derechos reconocidos en el Art. 17.3 de la Constitución solamente podrán ser suspendidos cuando se acuerdo la declaración del estado/s:

- a. De Sitio.
- b. De Excepción y de Sitio.
- c. De Alarma.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

37. La vía Jurisdiccional extraordinaria de protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución viene constituida por:

- a. El recurso de inconstitucionalidad.
- b. El recurso de amparo.
- c. Un procedimiento específico basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- d. El recurso de revisión.

38. Las asociaciones que persiguen fines tipificados como delitos:

- a. Son anulables.
- b. Son ilegales por declaración del Ministerio del Interior.
- c. Son ilegales y podrán ser disueltas por los Tribunales.
- d. Son nulas.

39. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 38 de la Constitución:

- a. Deber ser objeto de desarrollo mediante ley orgánica.
- b. Son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- c. No necesitan ser desarrollados legislativamente para ser aplicables.
- d. Todas las respuestas son correctas.

40. Los extranjeros residentes en España:

- a. No podrán votar en ningunas elecciones.
- b. Votarán en las elecciones municipales si el tratado internacional o la ley correspondiente lo permite.
- c. Votarán tanto en las elecciones generales como en las locales.
- d. Podrán votar o no, en cualquier tipo de elecciones, según se disponga, pues la Constitución no señala nada al respecto.

41. No es competencia del Tribunal Constitucional conocer de:

- a. Los recursos de amparo.
- b. Las cuestiones de inconstitucionalidad.

- c. Los conflictos de competencia entre municipios.
- d. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado.

42. Madrid, según la Constitución:

- a. Se convierte en Comunidad Autónoma uniprovincial.
- b. Es la capital del Estado.
- c. Se convierte en distrito único y especial, teniendo un trato diferenciado respecto a las demás provincias.
- d. Las respuestas a) y b) son correctas.

43. En la reforma de la Constitución, la celebración de referéndum es de carácter:

- a. Obligatorio.
- b. Facultativo.
- c. Potestativo.
- d. Facultativo u obligatorio, según el procedimiento de reforma.

44. En todos los supuestos que se enumeran s continuación se requiere resolución judicial excepto en uno:

- a. Para prohibir una reunión en caso de alteración del orden público.
- b. Para efectuar un registro policial en un domicilio particular.
- c. Para intervenir una comunicación postal, telegráfica o telefónica.
- d. Para disolver una asociación.

45. El secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas que la Constitución reconoce pretende garantizar el derecho fundamental de la persona a:

- a. El honor.
- b. La intimidad.
- c. La inviolabilidad del domicilio.
- d. La libertad ideológica.

46. ¿Cómo deben ser la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos de acuerdo con el Art. 6 de la Constitución?

- a. Democráticos.
- b. Sociales.
- c. Monolíticos.
- d. Libres.

47. Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar:

- a. No pueden ejercer el derecho de petición.
- b. Pueden ejercer el derecho de petición individual y colectiva.
- c. Sólo pueden ejercer el derecho de petición individual.
- d. Sólo pueden ejercer el derecho de petición colectiva.

48. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto de la libertad religiosa reconocida en nuestra Constitución:

- a. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su religión.
- b. Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas.
- c. La nación española constituye un Estado confesional.
- d. La libertad religiosa está desarrollada en la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de Julio.

49. La libertad de cátedra constituye una manifestación de la:

- a. Libertad ideológica.
- b. Libertad de residencia.
- c. Libertad de expresión.
- d. Libertad de sindicación.

50. La Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, dedicada a los “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” comprende los artículos:

- a. 14 a 29 y 30.2.
- b. 14 a 29.
- c. 15 a 38.
- d. 15 a 29.

51. Corresponde proponer la declaración del estado de sitio:

- a. Al Congreso de los Diputados.
- b. Al Gobierno.
- c. Al Rey.
- d. Al Presidente del Gobierno.

52. Las medidas de conflicto colectivo:

- a. Es un derecho concedido únicamente a los trabajadores.
- b. No están reconocidas en la Constitución.
- c. Es un derecho reconocido a los trabajadores y a los empresarios.
- d. Es un derecho del que únicamente disfrutaban los empresarios.

53. Señale la afirmación incierta:

- a. El recurso de amparo se interpone ante el Tribunal Constitucional.
- b. El recurso de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Supremo.
- c. El Tribunal Constitucional conoce tanto de los recursos de amparo como de los de inconstitucionalidad.
- d. La L.O. 2/1979, de 3 de Octubre, del Tribunal Constitucional, ha sido reformada por la L.O. 1/2000, de 7 de Enero.

54. Concluido al plazo que señala la Constitución, el detenido:

- a. Será puesto a disposición del Ministerio Fiscal.
- b. Será puesto a disposición judicial o en libertad.
- c. La policía podrá prorrogar por otro plazo igual su detención.
- d. Será puesto inmediatamente en libertad.

55. Según el Art. 168 de la Constitución, es una parte esencial de la misma:

- a. El Título Preliminar.
- b. El Título I.
- c. La Sección 2ª del Capítulo II del Título I.
- d. El Título X.

56. En la Constitución Española, los Tribunales de Honor:

- a. Son permitidos siempre que actúen dentro del ámbito de las organizaciones profesionales.
- b. Son permitidos en el único ámbito de la Administración Civil.
- c. No son permitidos en el ámbito de las organizaciones profesionales.
- d. Son permitidos únicamente en el ámbito de la Administración Civil y en el de las organizaciones profesionales.

57. El régimen de sindicación dispuesto en la Constitución para las Fuerzas Armadas:

- a. También es aplicable a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.
- b. No es aplicable a los llamados Institutos Armados.
- c. Es también Igualmente aplicable a los funcionarios públicos.
- d. Todas las respuestas son correctas.

58. La objeción de conciencia:

- a. Podrá ser objeto de recurso de amparo en caso de ser vulnerado tal derecho.
- b. No está reconocida en la Constitución.

- c. Deberá ser regulada por Ley Orgánica.
- d. No está reconocida en la Constitución como un derecho fundamental.

59. Del derecho al secreto de las comunicaciones:

- a. Quedan excluidas las comunicaciones postales.
- b. Quedan excluidas las comunicaciones telegráficas.
- c. Quedan excluidas las que se realicen por medio de la informática.
- d. Todas las respuestas son falsas.

60. La Ley que regula, según la Constitución, el derecho al trabajo y el deber de trabajar del ciudadano español es:

- a. El Fuero del Trabajo.
- b. El Estatuto de los Trabajadores.
- c. La Ley del Consejo Económico-Social.
- d. La Ley de Procedimiento Laboral.

61. Las ciudades de Ceuta y Melilla:

- a. Podrán constituirse en una única Comunidad Autónoma.
- b. Tienen vedado constitucionalmente el régimen autonómico, salvo reforma de la Constitución.
- c. Podrán integrarse en la Comunidad Andaluza si en referéndum así se dice.
- d. Podrán constituirse en dos Comunidades Autónomas distintas.

62. La enseñanza y formación religiosa:

- a. No está contemplada como derecho constitucional.
- b. Está reconocida constitucionalmente, pero el Estado no tendrá en ello intervención alguna.
- c. Es un derecho constitucional contemplado únicamente para la religión católica, sin perjuicio de la libertad de culto.
- d. Es un derecho constitucional que deberá ser garantizado por el Estado.

63. La Constitución:

- a. Prevé la extradición en cumplimiento de un tratado o de la ley.
- b. Reconoce el derecho de asilo para los extranjeros.
- c. Reconoce el derecho de asilo para los apátridas.
- d. Todas las respuestas son correctas.

64. La Constitución:

- a. Prohíbe la Investigación de la paternidad.
- b. Permite la investigación de la paternidad.
- c. No hace referencia alguna a la investigación de la paternidad.
- d. Permite la investigación de la paternidad siempre que el Ministerio Fiscal se declare favorable a dicha solicitud.

65. El principio de Juez ordinario predeterminado por la Ley:

- a. Significa que no puede producirse indefensión.
- b. No está reconocido por la Constitución.
- c. Significa que no se puede elegir el Juez que ha de conocer del asunto.
- d. Es equivalente al principio de presunción de inocencia.

66. Los partidos políticos:

- a. Son los representantes de la soberanía nacional.
- b. Expresan la voluntad del Estado.
- c. Representan al Estado.
- d. Son Instrumentos fundamentales de la participación política.

67. El derecho fundamentas a la libertad religiosa y de culto:

- a. Se reconoce únicamente a las confesiones religiosas.
- b. Se reconoce únicamente a los individuos.
- c. Se reconoce a los individuos y a las comunidades.
- d. Se reconoce únicamente a las comunidades.

68. Los derechos reconocidos en el Art. 15 de la Constitución pueden ser suspendidos:

- a. Con carácter general cuando se declare el estado de alarma.
- b. Con carácter general cuando se declare el estado de excepción.
- c. Con carácter general cuando se declare el estado de sitio.
- d. En ningún caso.

69. Las asociaciones:

- a. No deberán constar en registro alguno.
- b. Deberán constar en un registro a los meros efectos de publicidad.
- c. Podrán ser disueltas por orden gubernativa del Ministerio del Interior.
- d. Deberán solicitar previamente la legalización a los Tribunales de la Justicia ordinarios.

70. Los funcionarios públicos:

- a. Tendrán un régimen sindical peculiar regulado por ley.
- b. Gozarán del mismo régimen sindical que los miembros de las Fuerzas Armadas.
- c. Únicamente podrán asociarse en organizaciones profesionales.
- d. No podrán sindicarse.

71. Es plazo máximo de duración del estado de alarma, salvo que sea ampliado, es de:

- a. Diez días.
- b. Quince días.
- c. Veinte días.
- d. Un mes.

72. Según la Constitución, la enseñanza básica:

- a. Es obligatoria pero no necesariamente gratuita.
- b. Es obligatoria y gratuita.
- c. Es gratuita pero no obligatoria.
- d. No es obligatoria ni gratuita.

73. ¿Quién puede declarar el estado de excepción?

- a. El Presidente del Gobierno.
- b. El Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno.
- c. El Gobierno, previa autorización del Congreso.
- d. Las Cortes Generales.

74. La Constitución reconoce:

- a. La propiedad privada.
- b. La libertad de empresa.
- c. La herencia.
- d. Todas las respuestas son correctas.

75. El Título Preliminar de la Constitución está compuesto por:

- a. 2 Capítulos.
- b. 3 Capítulos.
- c. 4 Capítulos.
- d. Todas las respuestas son falsas.

76. Están excluidos de la extradición:

- a. Los delitos políticos.
- b. Los delitos de terrorismo.
- c. Los delitos contra la seguridad interior del Estado.
- d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

77. La duración máxima del estado de excepción, salvo que sea prorrogado, es de:

- a. 15 días.
- b. 20 días.
- c. 30 días.
- d. 45 días.

78. La objeción de conciencia:

- a. Está reconocida por la Constitución.
- b. Es un derecho que de ser vulnerado podrá dar lugar a la interposición del Recurso de Amparo.
- c. Está regulada y fijados sus requisitos por una ley, por mandato de la Constitución.
- d. Todas las respuestas son correctas.

79. La Declaración Universal de Derechos Humanos:

- a. Ocupa un Título de la Constitución.
- b. Es reconocida expresamente como de valor superior a la propia Constitución.
- c. No aparece mencionada en el texto constitucional.
- d. Servirá para interpretar los derechos fundamentales y libertades públicas que se reconocen en la Constitución.

80. Para que los derechos reconocidos en la Constitución sean directamente aplicables y, por tanto, directamente invocados ante los Tribunales, será preciso:

- a. Que se refiera a los derechos y libertades del Capítulo II del Título I.
- b. Que se refiera a los derechos y libertades del Título Preliminar.
- c. Que se refiera a los derechos y libertades del Capítulo I del Título II.
- d. Que se refiera a cualquier derecho o libertad reconocidos en la Constitución.

81. La nacionalidad española, según determina la Constitución:

- a. Se adquiere por nacimiento.
- b. Cualquiera que sea el modo de adquisición, se podrá privar de ella.
- c. En ningún caso se podrá perder.
- d. Todas las respuestas son falsas.

82. ¿Cuál es la duración máxima del estado de sitio?

- a. Quince días, salvo que sea ampliado por el Congreso.
- b. Treinta días, prorrogables por otro plazo igual.
- c. No se establece plazo temporal.
- d. Seis meses.

83. En el estado de excepción no podrá ser suspendido:

- a. El derecho de inviolabilidad del domicilio.
- b. El derecho del secreto de las comunicaciones.
- c. El derecho de ser asistido el detenido por el Abogado en las diligencias policiales.
- d. Todas las respuestas son falsas.

84. En el estado de excepción podrá ser suspendido:

- a. El derecho del detenido a ser asistido de Abogado en las diligencias policiales.
- b. El derecho al honor y a la intimidad familiar.
- c. El derecho a entrar y salir libremente de España.
- d. El derecho de libre producción científica y técnica.

85. Para que la ciudad de Melilla se constituya en Comunidad Autónoma:

- a. Será preciso que así lo decida su Ayuntamiento.
- b. No será precisa autorización alguna del Congreso.
- c. No será precisa autorización de las Cortes Generales.
- d. Será preciso que las Cortes Generales así lo autoricen por Ley Ordinaria.

86. Respecto al derecho a la educación, la Constitución:

- a. Reconoce la autonomía universitaria.
- b. Reconoce a la iniciativa privada, la inspección y homologación del sistema educativo.
- c. Prohíbe la creación de universidades de titularidad no pública.
- d. No reconoce la gratuidad de la enseñanza básica.

87. La Constitución, en el ejercicio del derecho a comunicar libremente la información veraz:

- a. Reconoce el derecho al secreto profesional.
- b. Lo limita en el supuesto del secuestro de publicaciones previa resolución administrativa.
- c. No establece limitación alguna a la práctica de dicho derecho.
- d. Reconoce su limitación en los casos de censura previa según desarrolle ley posterior.

88. El derecho de petición podrá ejercitarse:

- a. Ante cualquier poder público.
- b. Únicamente ante las Cortes Generales.
- c. Únicamente ante los organismos no públicos.
- d. Únicamente ante el Gobierno.

89. El derecho de sindicación de las Fuerzas Armadas según el tenor literal de la Constitución:

- a. Podrá ser limitado pero no exceptuado.
- b. Podrá ser limitado e incluso exceptuado.
- c. No podrá ser limitado ni exceptuado.
- d. Estará limitado, pero no exceptuado.

90. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley está reconocido en la Constitución en el artículo:

- a. 26.
- b. 23.
- c. 25.
- d. 24.

91. El desarrollo legislativo de alguna de los derechos considerados fundamentales requiere:

- a. Ley Orgánica.
- b. Ley Ordinaria.
- c. Decreto del Consejo de Ministros.
- d. Decreto-Ley.

92. En el estado de excepción no podrá ser suspendido:

- a. El derecho de toda persona detenida a ser informada de las razones de su detención.
- b. El derecho del detenido a ser asistido de Abogado en las diligencias policiales.
- c. El derecho de la persona detenida a no declarar.
- d. Todas las respuestas son correctas.

93. El plazo decretado para el estado de alarma:

- a. No podrá ser prorrogado en ningún caso.
- b. Podrá prorrogarse a instancias del Gobierno con la autorización de ambas Cámaras.
- c. Podrá prorrogarse con la autorización del Congreso.
- d. Podrá ser prorrogado por otro plazo igual con la autorización del Rey a instancias del Gobierno.

94. De acuerdo con lo establecido en el art 33.2 de la LO. del Tribunal Constitucional, el plazo de que disponen el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas para interponer el recurso de inconstitucionalidad, será:

- De tres meses, exclusivamente.
- De seis meses.
- De nueve meses.
- Ninguna de las respuestas es correcta, ya que los órganos Colegiados Ejecutivos de las CC.AA. no son competentes para la interposición de dicho Recurso.

95. ¿En qué plazo debe interponerse el recurso de amparo constitucional cuando la violación del derecho o libertad fundamental tenga su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial?

- Da veinte días, a partir de la notificación de la resolución recaída.
- De un mes, a partir de la notificación de la resolución recaída,
- De treinta días, a partir de la notificación de la resolución recaída.
- De seis meses, a partir de la notificación de la resolución recaída.

96. Los derechos recogidos en el Capítulo I del Título I, bajo el epígrafe de “De los españoles y extranjeros”, ¿con qué protección cuentan?:

- Han de ser desarrollados por Ley Orgánica y pueden recurrirse en Amparo ante el Tribunal Constitucional, o mediante el Recurso de Inconstitucionalidad.
- Han de ser desarrollados por Ley Ordinaria, y pueden ser defendidos mediante el Recurso de Inconstitucionalidad.
- Únicamente suponen un mandato al legislador debiendo, por tanto, informar la legislación positiva.
- No cuentan con ninguna protección especial, ya que son materia del Derecho Común, debiendo ser defendidos según lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico.

97. Se puede Interponer Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional con el fin de defender los siguientes derechos:

- Los recogidos en el Título Preliminar.
- Los recogidos en el Art. 14, Sección 2ª del Capítulo II del Título I.
- Los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II y el Art. 30.
- Los recogidos en el Art. 14, Sección 1ª del Capítulo II del Título I y el Art. 30.2.

98. En lo que a las lenguas se refiere, según la Constitución:

- Sólo el castellano es lengua oficial.
- El castellano es la lengua oficial en todo el territorio español, así como también lo es la lengua propia de cada Comunidad Autónoma allí donde exista.
- Sólo la lengua propia es la oficial en la Comunidad Autónoma donde exista.
- El español y la lengua propia son oficiales por igual en las Comunidades Autónomas ,de acuerdo con los Estatutos de Autonomía .

99. La Constitución admite como valor superior del ordenamiento jurídico el pluralismo político, según esto, ¿sería posible la existencia de un partido republicano?

- Sí, siempre y cuando sus estatutos y actuaciones estuviesen sujetos a lo dispuesto en la Ley.
- Sólo si renuncian al derrocamiento de la Monarquía.
- Sólo si el Rey fuera el Presidente de la República.
- Todas las respuestas son incorrectas.

100. Según la Constitución, en los edificios públicos y actos oficiales de las Comunidades Autónomas, la bandera de España:

- Deberá utilizarse sola.
- Podrá utilizarse junio con la de la Comunidad Autónoma.
- Nunca debe usarse junto con la de la Comunidad Autónoma.

- d. Deberá usarse junto con la de la Comunidad Autónoma.

101. Además del título de Rey de España, el Rey podrá utilizar los demás:

- a. Que autoricen las Cortes Generales.
- b. Que correspondan a la Corona,
- c. Que correspondan a la condición de Jefe de Gobierno.
- d. Vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona.

102. ¿Qué artículo abre el Título de la Constitución dedicado a la regulación de la Corona?

- a. El artículo 55.
- b. El artículo 56.
- c. El artículo 57.
- d. El artículo 54.

103. Es función del Rey:

- a. Nombrar al Presidente del Gobierno el día siguiente al escrutinio electoral.
- b. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- c. Ejercer el derecho de gracia y conceder indultos generales.
- d. Las tres respuestas anteriores son correctas.

104. La Reina consorte o el consorte de la Reina, ¿pueden asumir funciones constitucionales?

- a. Sí, en todo caso.
- b. No, en ningún caso.
- c. No, salvo lo dispuesto para la Regencia.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

105. En la sucesión al trono:

- a. Dentro del mismo grado de parentesco se prefiere siempre la persona de más edad a la de menos.
- b. Dentro del mismo grado de parentesco se prefiere el varón a la mujer.
- c. Se prefiere en todos los casos la persona de más edad a la de menos.
- d. Se prefiere en todos los casos el varón a la mujer.

106. De acuerdo con la Constitución, una persona con derechos sucesorios al trono quedará automáticamente excluida en la sucesión a la Corona si contrae matrimonio contra la expresa prohibición:

- a. Del Rey.
- b. De las Cortes Generales.
- c. Del Rey o de las Cortes Generales.
- d. Del Rey y de las Cortes Generales.

107. Para que la Inhabilitación del Rey se lleve a efecto, es preciso que la imposibilidad del ejercicio de su autoridad sea reconocida por:

- a. Las Cortes Generales.
- b. El Gobierno.
- c. Las Cortes Generales o el Gobierno.
- d. Las Cortes Generales y el Gobierno.

108. En su caso, el cargo de tutor del Rey será desempeñado en primer lugar:

- a. Por el padre o la madre del Rey.
- b. Por la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto.
- c. Por la persona mayor de edad más próxima a suceder en la Corona.
- d. Por la persona que nombren las Cortes Generales.

109. Los actos del Rey sin refrendo:

- a. Carecen siempre de validez, sin excepción alguna.
- b. Carecen de validez, excepto los actos relativos al nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su casa.
- c. Carecen de validez, excepto los actos relativos al nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su Casa y los que se refieran a la concesión de honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- d. Trasladan la responsabilidad a las personas que constitucionalmente debían prestar el refrendo.

110. La propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, ¿quién deberá refrendarla?

- a. El anterior Presidente del Gobierno.
- b. El Ministro de Relaciones con las Cortes.
- c. El Presidente del Congreso.
- d. Ninguno de los citados.

111. Por medio del refrendo, de los actos del Rey se responsabilizan:

- a. Las Cortes Generales.
- b. El Gobierno.
- c. El Gobierno o las Cortes Generales.
- d. Las personas que lo otorgan.

112. El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, pero la Constitución matiza que dicha representación lo será especialmente con:

- a. Con los países integrantes de la Unión Europea.
- b. Con los países Iberoamericanos.
- c. Con los países de su comunidad histórica.
- d. Con los países de su entorno cultural y geográfico.

113. En el caso de que no exista Tutor testamentario del Rey menor ¿quién será Tutor del mismo?

- a. Las personas nombradas por las Cortes Generales en cualquier caso.
- b. El padre o la madre, mientras permanezcan viudos.
- c. El pariente de más edad del Rey menor.
- d. El padre o la madre, en cualquier caso.

114. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde por el Rey?

- a. La convocatoria de elecciones generales.
- b. La convocatoria de referéndum.
- c. La convocatoria de las Cortes Generales.
- d. La convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

115. ¿Ante quién se proclama al Rey?

- a. Ante al Congreso de los Diputados.
- b. Ante el Senado.
- c. Ante el Gobierno.
- d. Ante las Cortes Generales.

116. ¿Qué grado es preferido en el caso de que se dé un supuesto de igualdad de línea?

- a. El grado más remoto al más cercano.
- b. El grado más próximo al más remoto.
- c. El grado más directo al indirecto.
- d. La Constitución no establece ese supuesto.

117. ¿Quién es llamado en primer lugar en caso de que se deba declarar la Regencia por inhabilitación

del Rey?

- a. El Príncipe heredero si es mayor de edad.
- b. El Príncipe heredero en cualquier caso.
- c. El padre o la madre del Rey.
- d. El pariente de más edad del Rey.

118. ¿Pueden acumularse los cargos de Tutor y Regente en una misma persona?

- a. No, en ningún caso.
- b. Sólo en el caso de la madre o el padre del Rey menor.
- c. Sólo en el caso de ascendientes indirectos del Rey menor.
- d. Sí, en el padre, la madre, o ascendientes directos del Rey menor.

119. ¿En cuál de los siguientes casos es imprescindible ser español de nacimiento?

- a. Para ejercer la Regencia.
- b. Para ejercer la tutela testamentaria.
- c. Para ser proclamado Rey.
- d. Para ejercer la Regencia y la tutela testamentaria.

120. Conforme a lo previsto en el artículo 57.5 de la Constitución, las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán:

- a. Por el propio Rey.
- b. Por una ley orgánica.
- c. Por las Cortes Generales
- d. Por una ley ordinaria.

1. C)
2. B)
3. B)
4. D)
5. D)
6. D)
7. B)
8. A)
9. D)
10. B)
11. C)
12. C)
13. C)
14. C)
15. D)
16. B)
17. B)
18. B)
19. A)
20. C)
21. C)
22. D)
23. D)
24. C)
25. B)
26. D)
27. D)
28. B)
29. C)
30. A)
31. C)
32. A)
33. B)
34. B)
35. C)
36. A)
37. B)
38. C)
39. C)
40. B)
41. C)
42. B)
43. D)
44. A)
45. B)
46. A)
47. C)
48. C)
49. C)
50. D)
51. B)
52. C)
53. B)
54. B)
55. A)
56. C)
57. A)
58. A)
59. D)
60. B)
61. D)
62. D)
63. D)
64. B)
65. C)
66. D)
67. C)
68. D)
69. B)
70. A)
71. B)
72. B)
73. C)
74. D)
75. D)
76. A)
77. C)
78. D)
79. D)
80. A)
81. D)
82. C)
83. C)
84. C)
85. A)
86. A)
87. A)
88. A)
89. B)
90. D)
91. A)
92. D)
93. C)
94. C)
95. C)
96. D)
97. D)
98. B)
99. A)
100. D)
101. B)
102. B)
103. B)
104. C)
105. B)
106. D)
107. A)
108. B)
109. B)
110. C)
111. D)
112. C)
113. B)
114. D)
115. D)
116. B)
117. A)
118. D)
119. B)
120. B)

1. ¿En qué fecha fue ratificada por el pueblo español, a través de referéndum, la Constitución española de 1978?

- a. El 29 de diciembre de 1978.
- b. El 6 de diciembre de 1978.
- c. El 27 de diciembre de 1978.
- d. El 31 de octubre de 1978.

2. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la Constitución española de 1978:

- a. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma carece de cualquiera de los derechos contemplados en la Constitución.
- b. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social.
- c. La Administración Civil puede imponer sanciones que impliquen privaciones de libertad.
- d. El condenado a una pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma sólo ostenta el derecho a la vida ya que la Constitución abole la pena de muerte.

3. Se podrá recabar, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la tutela de:

- a. Todos los derechos comprendidos en el título I de la Constitución Española.
- b. Las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, así como el derecho a la Objeción de Conciencia reconocido en el artículo 30.
- c. La materia regulada en los Títulos I, III, y VIII de la Constitución Española.
- d. Los derechos y libertades recogidos en los Capítulos I, III y IV del Título I de la Constitución Española.

4. ¿Qué artículo de la Constitución determina que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad e igualdad y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural?

- a. El artículo 1.1.
- b. El artículo 14.
- c. El artículo 2.
- d. El artículo 9.2.

5. La adopción, requisitos y condiciones de los estados de excepción, alarma y sitio se regulan en la Constitución española. Señale de entre las siguientes la frase correcta:

- a. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 5 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
- b. El estado de excepción será declarado por las Cortes Generales mediante Real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización de las Cámaras.
- c. El estado de sitio será declarado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
- d. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

6. Cuando se propusiese la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección 1ª del Título I -derechos fundamentales y libertades públicas- o al Título II -La Corona-, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de:

- a. 1/3 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- b. 3/5 de cada Cámara, y a la convocatoria de referéndum.
- c. 2/3 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
- d. 2/3 de cada Cámara, y a la disolución de las Cortes en el plazo máximo de 30 días.

7. Cuando dice la Constitución, en su Título Preliminar, que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, se está refiriendo a:

- a. El pueblo español.
- b. Las Cortes Generales.
- c. Los partidos políticos.
- d. Los miembros del Gobierno de la Nación.

8. En relación al derecho a la educación, indique la respuesta correcta:

- a. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación.
- b. Los profesores y los padres intervendrán en la gestión y control de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos y privados.
- c. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
- d. Sólo las respuestas a) y c) son correctas.

9. De acuerdo con la Constitución española, los principios rectores de la política social y económica recogidos en sus artículos 39 a 52 del capítulo tercero del Título I, podrán ser objeto de protección ante la jurisdicción ordinaria:

- a. Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.
- b. Mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- c. De acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.
- d. Mediante el recurso de inconstitucionalidad a aquellas Leyes que los desarrollen.

10. Con respecto al estado de excepción previsto en la Constitución española, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a. La declaración del estado de excepción y su finalización corresponde siempre al Congreso de los Diputados.
- b. La declaración del estado de excepción corresponde al Congreso de los Diputados y su prórroga y finalización anticipada al Gobierno.
- c. La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, debiendo autorizar su prórroga, en caso necesario, el Congreso de los Diputados.
- d. La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, previa autorización del congreso de los Diputados, que también debe autorizar, en su caso, su finalización anticipada.

11. Según lo establecido en la Constitución española, la iniciativa de reforma constitucional, cuando se trate de una revisión parcial que afecte al contenido del artículo 25.2, se ejercerá:

- a. Por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
- b. Por mayoría de 2/3 del Congreso y del Senado, reunidos en sesión conjunta.
- c. Por el Gobierno, el Congreso y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
- d. Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, por mayoría de 2/3 y por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

12. La disposición final de la Constitución española dispone que la misma entraría en vigor:

- a. Al año de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.
- b. El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.
- c. Al día siguiente de la publicación de su texto oficial en el Boletín oficial del Estado.
- d. La Constitución no contiene normas específicas sobre su entrada en vigor y, por lo tanto, aplicando lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, entró en vigor a los 20 días de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.

13. El derecho a la igualdad de todos los españoles y el derecho a la vida e integridad física y moral, están recogidos en la Constitución española, respectivamente, en los artículos:

- a. 15 y 14.
- b. 14 y 16.
- c. 14 y 15.

- d. 16 y 14.

14. En el supuesto en que al detenido se le suspendan los derechos de información y de asistencia de abogado, se habrá declarado el siguiente estado:

- a. Emergencia.
- b. Catastrófico.
- c. Excepción.
- d. Sitio.

15. A la luz de nuestra Constitución española, señale la frase correcta respecto a las Cortes Generales:

- a. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Estas sesiones deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
- b. El Congreso se compone de un mínimo de 400 y un máximo de 500 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en los términos que establezca la ley (art. 68.1 CE).
- c. Las elecciones al Congreso de los Diputados tendrán lugar entre los 20 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 30 días siguientes a la celebración de las elecciones.
- d. Habrá una Diputación permanente en cada Cámara, compuesta por un mínimo de 20 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

16. La detención ilegal, de la que se hace referencia en nuestro texto constitucional:

- a. No puede durar más de 72 horas.
- b. No puede tener una duración superior a dos años.
- c. Da lugar al procedimiento “habeas corpus” mediante el cual se consigue que la persona detenida ilegalmente sea puesta disposición judicial.
- d. No existe dicho concepto.

17. Según la Constitución española no es un principio informador del ordenamiento jurídico:

- a. Publicidad de las normas.
- b. Irretroactividad de las disposiciones favorables para el individuo.
- c. Seguridad jurídica.
- d. Todos los anteriores son principios informadores del ordenamiento jurídico.

18. Para alterar el contenido del Título preliminar de la Constitución española será necesario:

- a. Disolución de las Cortes y elecciones a Cortes constituyentes.
- b. Mayoría de 2/3 de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes.
- c. Además de lo establecido en la respuesta b), que las nuevas Cortes aprueben la reforma y la sometan a referéndum.
- d. Que el Congreso apruebe la reforma y la someta a referéndum.

19. ¿Cuál de los siguientes derechos no puede suspenderse con la declaración de los estados de excepción o de sitio?:

- a. Huelga.
- b. Libertad de circulación por el territorio nacional.
- c. Derecho al trabajo.
- d. Pueden suspenderse todos los derechos anteriormente indicados.

20. Según la Constitución española, los Tribunales de honor, en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales:

- a. Están prohibidos.
- b. Están permitidos cuando el Consejo General del Poder Judicial lo autorice.
- c. Sólo pueden constituirse cuando se declare el estado de excepción.
- d. Están permitidos, pero sólo en los supuestos señalados en la Constitución.

21. Mediante el procedimiento de Habeas Corpus se podrá tener:

- a. La autorización de celebración de reunión en un lugar de tránsito público.
- b. La protección civil del honor.
- c. La inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.
- d. La concesión del derecho a asilo a los extranjeros que lo hayan solicitado previamente.

22. La Constitución española se ha visto reformada en uno de estos artículos artículos. Indíquelo:

- a. Artículo 17.2.
- b. Artículo 23.2.
- c. Artículo 12.3.
- d. Artículo 13.2.

23. Según la Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión:

- a. El mantenimiento del orden público y el restablecimiento de la paz ciudadana que fuera perturbada.
- b. Garantizar la seguridad interior del Estado y la protección de los ciudadanos.
- c. Garantizar la soberanía de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
- d. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

24. El principio de legalidad implica:

- a. Que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución, exclusivamente.
- b. Que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
- c. Que las normas de rango inferior no pueden contener ningún precepto que contradiga lo establecido en otras de rango superior.
- d. Que los reglamentos están sujetos a la Ley.

25. Señale la frase incorrecta respecto a los decretos-legislativos y decretos-leyes:

- a. El Gobierno podrá dictar, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, decretos-leyes, que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
- b. Respecto a los decretos-legislativos, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo - textos refundidos-.
- c. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo los 20 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
- d. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos.

26. Respecto al tema de la Sucesión de la Corona, la Constitución Española establece una serie de afirmaciones. Señale de entre las siguientes la correcta en todos sus términos:

- a. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de SM Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a las anteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más.
- b. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
- c. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, podrán quedar excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
- d. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por un Real Decreto.

27. Respecto a la regencia, la Constitución Española establece una serie de afirmaciones. Señale de entre las siguientes la incorrecta:

- a. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la CE, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
- b. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de manera prevista en la respuesta anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
- c. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por el Senado, y se compondrá de 2, 4 o 6 personas.
- d. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

28. Respecto a la tutela, la Constitución Española establece una serie de afirmaciones. Señale de entre las siguientes la/s correcta/s:

- a. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
- b. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.
- c. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
- d. Las respuestas a) y b) son correctas.

29. Dentro de las funciones constitucionales del Rey hay que excluir una. Señálela:

- a. Ostentar la Jefatura del Estado.
- b. Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, al Fiscal General del Estado y a los 12 miembros del Tribunal Constitucional.
- c. Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- d. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, el cual podrá autorizar indultos generales.

30. Respecto al refrendo de los actos del Rey, la Constitución Española establece que:

- a. La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2, es decir, los relativos a nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa.
- b. Los actos del rey serán refrendados por las Cortes Generales y, en su caso, por el Presidente del Gobierno y los ministros competentes.
- c. De los actos del Rey serán responsables el propio Rey y las personas que los refrenden.

d. Ninguna respuesta es correcta.

Soluciones:

1. B). La respuesta a) es incorrecta porque el 29-12-1978 fue el día de su publicación en el BOE (y de su entrada en vigor). La respuesta d) es incorrecta porque el 31-10-1978 representa la fecha en que las Cortes Generales aprobaron el texto definitivo.
2. B). Ver art. 25.2 y 25.3 CE. Las respuestas a) y d) son incorrectas porque el art. 25.2 CE establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad". La respuesta c) es incorrecta porque el art. 25.3 CE establece que "la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad".
3. B). Ver art. 53.2 CE.
4. D). Ver art. 9.2 CE.
5. D). Ver art. 116 CE. La respuesta a) es incorrecta porque es erróneo el plazo aludido (debió decir 15 días y no 5). La respuesta b) es incorrecta porque debió decir que el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La respuesta c) es incorrecta porque debió decir "mayoría absoluta" (y no mayoría simple).
6. C). Ver art. 168 CE.
7. C). Art. 6 CE.
8. D). Ver art. 27 CE. La respuesta b) es incorrecta porque es erróneo los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos (excluidos los privados), en los términos que la ley establezca".
9. C). Ver art. 53.3 CE.
10. C). Ver art. 116 CE.
11. A).
12. B). La CE entró en vigor, conforme dispone su DF, el mismo día de su publicación en el BOE (29-12-1978).
13. C). Ver arts. 14 y 15 CE.
14. D). Ver art. 55.1 CE.
15. A). Ver art. 72.3 CE. Repárese que se pregunta por la afirmación correcta. De ahí que las respuestas b) -mínimo de 300 y máximo de 400 diputados conforme art. 68.1 CE-, c) -las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato y el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones, conforme art. 68.6 CE-, y d) -la Diputación Permanente de cada Cámara estará compuesta por 21 miembros, conforme art. 78.1 CE-, contengan afirmaciones incorrectas.
16. C). Ver art. 17 CE.
17. B). Ver art. 9.3 CE. Es principio informador la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (por tanto, se excluyen las disposiciones favorables).
18. C). Ver art. 168 CE.
19. C). Ver art. 55.1 CE.
20. A). Ver art. 26 CE.
21. C). Ver art. 17 CE.
22. D). Ver art. 13.2 CE.
23. D). Ver art. 104.1 CE.
24. B). Ver art. 9.1 CE.
25. C). Nótese que se pregunta por la frase incorrecta. Ver art. 86.2 CE (el plazo es de 30 días y no de

- 20 días). Por tanto, las respuestas a) -art. 86.1 CE-, b) -art. 82.2-, y d) - art. 85 CE- contienen afirmaciones acordes a nuestra CE.
26. B). Ver art. 57.2 CE. La respuesta a) es incorrecta porque debió decir "... siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos" (ver art. 57.1 CE). La respuesta c) es incorrecta porque debió decir "quedarán excluidas" y no "podrán quedar excluidas" (ver art. 57.4 CE). La respuesta d) es incorrecta porque debió decir "Ley Orgánica" y no "Real decreto" (ver art. 57.5 CE).
27. C). Ver art. 59.1, 59.2 y 59.4 CE. Nótese que se pregunta la respuesta incorrecta. Por tanto, la respuesta c) es la correcta porque debió decir "... de 1, 3 o 5 personas" y no "2, 4 o 6 personas), conforme dispone el art. 59.3 CE.
28. D). Las respuestas .a) y b) contienen afirmaciones verdaderas, fundamentadas en el art. 60.1 y 60.2 CE. Por tanto, es correcta la respuesta d).
29. D). Ver art. 56.1. 160, 123.2, 124.4 y 122.3 CE. Nótese que se pregunta la función que hay que excluir. De allí que sea correcta la respuesta d) dado que el Rey no puede autorizar indultos generales (art. 62.i CE).
30. A). Ver art. 56.3 CE. La respuesta b) es incorrecta porque debió decir que "los actos del rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes (art. 64.i CE). La respuesta c) es incorrecta porque debió decir que "de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden" y no "el propio Rey" (art. 64.2 CE).

SUPUESTOS

Número 1.

El 13 de noviembre de 2010 comienza un pleito en el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, en el que dos trabajadores litigan contra la empresa MÁRMOLES, SL. El 20 de abril de 2011 sigue el pleito sin resolverse causando un daño económico a los trabajadores, ya que el Juez ha notificado a las partes que no se decide a fallar el caso porque la ley aplicable al caso no es clara en sus preceptos.

La empresa Mármoles, SL, por su parte está de acuerdo con esta decisión porque considera que la citada ley es inconstitucional y que sería mejor aplicar otra norma relativa a los contratos temporales, argumento que habían expuesto los abogados de la empresa ante el Juez, solicitando de éste que interpusiera recurso de inconstitucionalidad.

1. Según el supuesto, ¿qué derecho recogido en la Constitución se puede estar violando?

- a. El derecho de petición judicial.
- b. El derecho al trabajo.
- c. El derecho de los trabajadores a un juicio normal.
- d. El derecho de los trabajadores a obtener tutela judicial efectiva de sus intereses legítimos.

2. ¿Cuál de los siguientes derechos no se estaría vulnerando en el supuesto?

- a. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
- b. El derecho a la tutela judicial efectiva.
- c. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley.
- d. El derecho a que se tutelén sus intereses.

3. Respecto a la petición de los abogados de la empresa:

- a. El Juez está obligado a interponer el recurso citado en el supuesto.
- b. El Juez no está obligado a interponerlo.
- c. Sólo lo interpondrá si lo considera conveniente.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

4. ¿Quién está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad?

- a. El propio Juez de lo social.
- b. Los abogados intervinientes en el proceso.
- c. 50 Diputados.
- d. Los trabajadores afectados en sus intereses.

5. ¿En qué artículo de la Constitución se recoge el principio de celeridad?

- a. En el artículo 25.
- b. En el artículo 17.
- c. En el artículo 117.
- d. En el artículo 24.

6. No se puede interponer recurso de inconstitucionalidad:

- a. Contra leyes contrarias a la Constitución.
- b. Por el Defensor del Pueblo.
- c. Contra Leyes orgánicas.
- d. Por el Juez que está conociendo de una causa afectada por la ley presuntamente inconstitucional.

7. En este caso concreto ¿cuál es el recurso que debería utilizarse?

- a. El recurso de inconstitucionalidad, puesto que la ley es contraria a la Constitución.
- b. La cuestión de inconstitucionalidad.
- c. El recurso contencioso-administrativo.
- d. No se da recurso alguno.

8. Para plantear la cuestión de inconstitucionalidad, hacen falta entre otros requisitos:

- a. Que se trate de una ley aplicable y válida todavía.
- b. Que en cualquier proceso se crea que una ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo es inconstitucional.
- c. Que en el proceso laboral únicamente, se considere que la ley es contraria a la Constitución.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

9. ¿Qué procedimiento pueden utilizar los trabajadores en la defensa de sus derechos vulnerados en el proceso, en caso que exista algún derecho vulnerado?

- a. Acudir al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad.
- b. El recurso de amparo.
- c. El procedimiento de la Ley de 1976 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
- d. Todas las respuestas son correctas.

10. El órgano judicial podrá plantear la cuestión:

- a. En cualquier momento del procedimiento.
- b. Después de dictarse sentencia.
- c. Dentro del plazo para dictar sentencia.
- d. Dentro del plazo para proponer prueba.

Soluciones:

1. D). Ver art. 24.1 CE. Ya que en el presente caso los trabajadores se encuentran en una situación de indefensión.
2. C). El derecho a Juez ordinario es una de las garantías procesales que el art. 24.2 CE enumera, pero es una garantía que en este procedimiento se entiende cumplida pues según la narración de los hechos no se dice que se trate de un Juez parcial elegido por la empresa para garantizarse el triunfo. Sino que es el Juez al que por sistema de reparto le ha correspondido conocer del asunto.
3. D). La respuesta correcta es la d) porque los únicos legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad son los indicados en el art. 32. El Juez lo único que podría formular es una cuestión de constitucionalidad cuando se dieran los requisitos del art. 35 LOTC.
4. C). Ver art. 32 LOTC.
5. D). Ver art. 24.2 CE. "Todos tienen derecho...a un proceso público sin dilaciones indebidas...".
6. D). Nótese que la pregunta está formulada en términos negativos. Según el art. 31 LOTC, el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra las Leyes (lo que incluye las ordinarias y las orgánicas), y según el art. 32.1 .b) LOTC está legitimado, entre otros, el Defensor del Pueblo. De ahí que la única respuesta correcta es la d) puesto que el Juez no tiene legitimación para el recurso.
7. B). Ver art. 35 LOTC.
8. B). Ver art. 35.1 LOTC.
9. D).
10. C). Ver art. 35.2 LOTC.

Número 2.

ROSA BERMÚDEZ sospecha fundadamente que su exmarido, Alberto Martínez, quiere acabar con su vida, debido a reiteradas amenazas de muerte sufridas. Por ello, decide ponerlo en conocimiento del Cuerpo de Policía de la Comisaría de Alcalá de Henares.

El día 23 de febrero de 2011, en el piso de la calle Sagasta nº 7, propiedad de Alberto, a las 22:30 horas de la noche se personó una pareja de la Policía Nacional con intención de proceder a un registro de su domicilio.

Alberto se negó al mismo sin que sus ruegos y protestas fueran escuchados.

Los agentes encuentran en el citado piso tres armas blancas y cuatro de fuego, procediéndose inmediatamente a su detención, a las 23:30 horas de la noche.

El 27 de febrero de 2011, fue puesto en libertad a las 20:30 horas de la tarde.

- 1. ¿Se está vulnerando algún derecho de Alberto al entrar la Policía en su domicilio?**
 - a. No, porque la Policía tiene derecho a entrar en domicilios con motivo de sus investigaciones.
 - b. Sí, se está vulnerando un derecho fundamental en caso de hacerse sin resolución judicial.
 - c. Sí, puesto que el domicilio es inviolable.
 - d. Las respuestas b) y c) son correctas.
- 2. Para el registro de un domicilio particular es necesario:**
 - a. Únicamente el consentimiento del titular.
 - b. Una resolución administrativa.
 - c. Una resolución judicial.
 - d. Las respuestas a) y c) son correctas.
- 3. ¿Cabe la suspensión general del derecho a la inviolabilidad del domicilio?**
 - a. Sí, en todo caso.
 - b. No, en ningún caso.
 - c. Sí, cuando se decrete el estado de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución Española.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 4. ¿Podrá suspenderse el derecho a la inviolabilidad del domicilio a personas determinadas?**
 - a. Sí, en relación a las investigaciones correspondientes a la prostitución.
 - b. Sí, pero sólo en relación a las investigaciones correspondientes a la actuación de elementos terroristas o bandas armadas.
 - c. No, en ningún caso.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 5. ¿Qué tipo de norma podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual, puede ser suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio para determinadas personas?**
 - a. Una ley orgánica.
 - b. Una ley ordinaria.
 - c. En ningún caso se podrá suspender de forma individual este derecho.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 6. ¿Cuál de estos derechos puede ser suspendido de forma general?**
 - a. El derecho de reunión y comunicación.
 - b. El derecho de huelga.
 - c. El secreto de las comunicaciones.
 - d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. ¿Se puede interponer recurso de amparo ante la violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio?

- a. Sí, pero sólo podrá interponerlo el Ministerio Fiscal.
- b. Sí, pero sólo podrá interponerlo la persona afectada.
- c. No, sólo podrá interponerse recurso de inconstitucionalidad.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. La detención preventiva:

- a. Durará el tiempo que la Autoridad Judicial crea conveniente.
- b. Durará el tiempo estrictamente necesario para la realización de las actividades tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- c. Es inconstitucional.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. ¿Es correcta la duración de la detención preventiva de Alberto?

- a. Sí, puesto que no excede del plazo de cuatro días.
- b. No, puesto que excede del plazo de cuarenta y ocho horas.
- c. No, puesto que excede del plazo de setenta y dos horas.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. ¿Debieron informar a Alberto de sus derechos de forma inmediata?

- a. No, también le pudieron informar en el plazo de diez horas.
- b. No, también le pudieron informar en el plazo de doce horas.
- c. Sí.
- d. Sólo las respuestas a) y b) son correctas.

Soluciones:

1. D). Ver. art. 18.2 CE.
2. D). El art. 18.2 CE exige bien el consentimiento del titular del domicilio bien resolución judicial, salvo caso de flagrante delito.
3. C). El art. 55.1 CE permite suspender determinados derechos entre ellos, la inviolabilidad del domicilio (art. 18. 2 CE), cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
4. B). El art. 55.2 CE permite que mediante LO se suspendan los derechos reconocidos en los arts. 17.2 y 18.2 y 3 CE de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
5. A). El art. 55.2 CE permite que se haga la suspensión referida siempre mediante LO.
6. D). Ver art. 55.1 CE.
7. D). En este caso se está vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio por la vía de hecho por parte de unos agentes de la autoridad siempre que se haya agotado la vía judicial previa, es decir, estamos en el art. 43.1 LOTC. Por ello, Alberto no puede interponer el recurso de amparo directamente, sino que primero deberá querrellarse contra los agentes de la autoridad y agotar la vía judicial.
8. B). Ver art. 17.2 CE. El tiempo necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, con un plazo máximo de 72 horas.
9. C). Alberto fue detenido el día 23 de febrero de 2011 a las 23.30 horas, y puesto en libertad a las 20.30 horas del día 27 de febrero de 2011. Por lo que la detención se ha excedido ampliamente del límite máximo de las 72 horas.
10. C). Ver art. 17.3 CE.

Número 3.

El día 1 de agosto de 1.977 el Pleno del Congreso de los Diputados creó una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución. Este proyecto fue definitivamente aprobado el día 31 de octubre del año 1978 por el Congreso (por 326 votos afirmativos, 6 en contra, y 13 abstenciones) y por el Senado (226 votos afirmativos, 5 en contra y 8 abstenciones). Se convocó el Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente, siendo aprobado por el 87,78% de votantes que representaba el 58,97% del censo electoral. Sancionado por Su Majestad el Rey, es publicado en el BOE el día 27 de diciembre del mismo año, fecha en que entra en vigor.

Ha transcurrido bastante tiempo desde la aprobación de la Constitución, por lo que los partidos políticos inician una serie de propuestas de reforma de determinados artículos, siendo las más significativas las siguientes:

- 1) Cambiar en el artículo 2 “...y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” por la redacción “...y garantiza el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
- 2) Cambiar los colores de la bandera española, establecidos en el artículo 4.
- 3) Modificar el artículo 12, estableciendo la mayoría de edad política a los 16 años.
- 4) Modificar la actual redacción del artículo 35 “...Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”, por la expresión... “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo”.
- 5) Modificar el artículo 54 en el sentido de que, además de supervisar la actividad de la Administración, también deberá supervisar la actividad del Gobierno.
- 6) Suprimir en el artículo 57 la preferencia en el proceso sucesorio del hombre sobre la mujer.

1. Teniendo en cuenta las circunstancias políticas y sociales existentes en la fecha en que fue aprobada la Constitución, podremos decir que es:

- a. Flexible, con la idea de proceder a retocarla cuando se establezca la democracia naciente.
- b. Ambigua en gran parte de su contenido, al haber tenido que ceder todas las fuerzas políticas en sus pretensiones.
- c. Ideológica, teniendo en cuenta la evolución política y social del momento.
- d. De extensión corta, limitándose a establecer los principios básicos para posteriormente desarrollarlos.

2. El Título X regula la reforma de Constitución, estableciendo dos procedimientos: el normal y el especial. ¿Cuántas reformas constitucionales se han producido hasta el momento?

- a. Una por el procedimiento normal, permitiendo que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España puedan ser votados en las elecciones generales.
- b. Hasta el momento no se ha producido ninguna reforma de la Constitución.
- c. Dos: Ambas por el procedimiento ordinario
- d. Todas las respuestas son falsas.

3. De todas las modificaciones propuestas, ¿Cuáles se llevarán por el procedimiento normal?

- a. La 4ª, 5ª y 6ª
- b. La 5ª y la 6ª
- c. La 4ª
- d. La 3ª, 4ª y 5ª

4. Para modificar el artículo 12 sobre la mayoría de edad penal es absolutamente necesario:

- a. La celebración de referéndum.
- b. La aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
- c. La aprobación por mayoría absoluta del Senado.
- d. Los 2/3 de votos afirmativos de ambas Cámaras.

5. Para modificar el proceso sucesorio de la Corona es absolutamente necesario:

- a. La celebración de referéndum.
- b. La aprobación por mayoría absoluta del Congreso.
- c. Los 3/5 de votos afirmativos del Senado.
- d. Los 2/3 de votos afirmativos del Congreso y la mayoría absoluta del Senado.

Soluciones:

1. B). *Es rígida, siendo complicada su reforma; al ser tan dispares las fuerzas políticas de aquel momento, hubo que recurrir en muchas ocasiones al consenso, lo que llevó a la indefinición en muchos puntos. El momento no estaba para ideologías, sino para ser realistas y conseguir que la transmisión se llevase a cabo cediendo todos en sus pretensiones ideológicas.*
2. C). *Ha sido revisado el artículo 13.2 por el sistema normal, permitiendo que los ciudadanos de la UE residentes en España puedan ser votados en las elecciones MUNICIPALES, y el artículo 135 para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria (ley de 26 de septiembre de 2011)*
3. D). *Cuando se trata de una reforma parcial, los artículos que se pueden reformar son los del Título preliminar (del 1 al 9), los de la sección 1ª del Capítulo II del Título I (del 15 al 29) y los del Título II (del 56 al 65).*
4. C). *Puede aprobarse esta reforma, que se llevará por el procedimiento ordinario, con la mayoría de los 2/3 del Congreso, siempre que haya mayoría absoluta del Senado. El referéndum solamente existirá si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras.*
5. A). *Toda reforma referida a la Corona (Título II) se llevará por el procedimiento especial, que en todo caso precisa los votos afirmativos de las 2/3 partes de cada Cámara y la celebración de un referéndum.*

Número 4.

En el hipotético caso de que muriese el Rey de España dejando como descendencia dos niñas de 8 y 12 años; si tiene, además, un sobrino de 15 años hijo de su hermano y por parte de la hermana una sobrina de 22 años y un sobrino de 19 años.

Tras muchas deliberaciones, se proclama Reina de España a la hija de 12 años de edad del Rey difunto. Éste, previendo la situación sucesoria a su inminente muerte, asigna a su hermana primogénita como posible tutora de la niña reina, ya que las infantas son huérfanas.

La persona nombrada Regente de los destinos de España no se encuentra muy preparada en estos menesteres, ya que jamás pudo pensar en la atribución de estas funciones, por lo que se dedica a asesorarse perfectamente de lo que se encuentra legislado al respecto.

El primer problema con el que se encuentra la nueva Casa Real es con la denuncia de un partido republicano, llamado Partido Comunista de Cielos y Tierras, que descubre y demuestra que en el nombramiento del actual presidente del Gobierno existen irregularidades posiblemente constitutivas de delito y solicita, además de la anulación del nombramiento, que se depuren todo tipo de responsabilidades.

1. El nombramiento de la nueva Reina, ¿se ajusta a la normativa vigente?

- a. Se ajusta a lo establecido en el Título II de la Constitución Española.
- b. No, porque en la actualidad las mujeres no tienen acceso al trono de España.
- c. El Rey debe ser el sobrino de 19 años, por ser el sobrino varón mayor de edad.
- d. Debe acceder a la Corona el hermano del Rey, porque en la actualidad tiene preferencia la línea del varón.

2. Dando como legal y válido el nombramiento de la infanta de 12 años como Reina de España, los destinos del Estado serían regentados hasta la mayoría de edad de la infanta:

- a. Por su tía nombrada en el Testamento real.
- b. Por su tío, hermano de su padre.
- c. Una persona española y mayor de edad nombrada por las Cortes Generales.
- d. Por el Jefe de la Casa Real.

3. ¿A quién corresponde ser nombrado tutor o tutora de la infanta?

- a. A su tía nombrada en el Testamento real.
- b. A su tío, hermano de su padre.
- c. A una (o varias) persona española y mayor de edad nombrada por las Cortes Generales.
- d. A quien corresponda ejercer la regencia.

4. Entre las obligaciones que la Constitución Española atribuye al Rey, no corresponderá al Regente:

- a. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno, refrendados por el Presidente del Congreso.
- b. El nombramiento del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, refrendado por el Presidente del Gobierno.
- c. El nombramiento y cese de los Ministros, previo refrendo del Presidente del Gobierno.
- d. El nombramiento y cese de los miembros de la Casa Real, previo refrendo del Presidente del Congreso.

5. ¿Quién se responsabilizará del ilegal nombramiento del Presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que el Titular de la Corona es menor de edad?

- a. El Regente.
- b. El propio Presidente del Gobierno.
- c. El Tutor de la Reina.
- d. El Presidente del Congreso.

Soluciones:

1. A) Al existir descendencia en la línea directa, será nombrada Reina la hija primogénita, ya que no existe varón ni prohibición de que pueda acceder a la Corona una mujer; solamente existe en cada uno de los grados la primacía del varón sobre la mujer.
2. B) El hermano del Rey es el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, ya que en el mismo grado prima el varón sobre la mujer (en este caso, sobre su hermana primogénita) y por lo tanto a él le corresponde la regencia.
3. A) En este caso, manda la voluntad póstuma del Rey, reflejada en su testamento.
4. D) Todos los actos del Rey precisan refrendo, excepto el nombramiento de los miembros de la Casa Real y la distribución de la asignación presupuestaria de su Familia y Casa.
5. D) La persona del Rey o Reina no está sujeta a responsabilidad, siendo responsable de sus actos aquella autoridad que refrene sus actos. El acto del nombramiento del Presidente del Gobierno es refrendado por el Presidente del Congreso.

Número 5.

En un determinado momento, la situación política de España es tan preocupante, que se hace necesario disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones.

Celebradas las elecciones generales, quedan elegidos por un periodo de cuatro años los miembros de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, proporcionalmente al número de votos que ha obtenido cada uno de los Partidos políticos. Se procede a la elección del Presidente en cada Cámara. En la Cámara Baja el candidato del partido socialista obtiene en la primera votación un total de 160 votos a favor y el candidato del partido popular 150 votos favorables.

Abierto el primer periodo de sesiones, el primer debate se centra en la aprobación de un proyecto de Ley ordinaria. El segundo debate se refiere a la aprobación de una Ley Orgánica. Por motivos no muy lógicos ni justificables, no puede precederse a la votación del primer debate por falta de quórum y por este motivo el Presidente de la Cámara levanta la sesión.

Uno de los Diputados, miembro del partido contrario al del Presidente, le increpa diciéndole que denunciará por prevaricación y otra serie de delitos, de los que no se extraña teniendo en cuenta la familia de estafadores de la que procede. Este Diputado es calmado por sus propios compañeros de partido.

En los pasillos del Congreso, otro Diputado amigo del Presidente de la Cámara, aborda al Diputado que ha insultado a su amigo y le dice que se avergüenza de que determinados tipejos representen al pueblo español y acto seguido, aprovechando su mayor estatura, le da un cabezazo en el rostro, rompiéndole las gafas, clavándosele un cristal en el ojo, que lo pierde como consecuencia de este incidente.

1. En este supuesto, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones es competencia de:

- a. Las Cortes Generales serán disueltas por el Presidente de las mismas, proponiendo al Rey la convocatoria de nuevas elecciones.
- b. Tanto la disolución de las Cortes Generales como la convocatoria de elecciones generales es competencia del Rey, a propuesta del Presidente del Congreso.
- c. Es al Presidente del Gobierno al que corresponde proponer la disolución de las Cortes Generales al Rey, que es a quien corresponde decretarla y convocar elecciones.
- d. La propuesta de disolución de las Cortes Generales corresponde en todo caso a los Presidentes de las Cámaras y la propuesta de convocatoria de elecciones al Presidente del Gobierno.

2. Durante el periodo de tiempo en que el Congreso de los Diputados se disuelve hasta que se forma la nueva Cámara, si surge algún asunto cuya resolución es competencia del Congreso de los Diputados:

- a. Resolverá el Pleno del Congreso en funciones
- b. No puede darse este supuesto.
- c. Durante este periodo el Presidente del Congreso de los Diputados y al menos 21 Diputados ejercerán las funciones que corresponden a la Cámara Baja.
- d. Corresponde sustituir al Congreso de los Diputados durante este periodo a La Mesa, presidida por el Presidente de la Cámara y compuesta por 4 Vicepresidentes y 4 Secretarios

3. ¿Cuál de los candidatos será investido como Presidente del Gobierno?

- a. Puede ser elegido el candidato del partido socialista o el del partido popular, pero realizando una nueva votación.
- b. En este caso en que no se obtiene mayoría absoluta, se elige al que tiene más votos, es decir, al del partido socialista.
- c. Será elegido el candidato del partido socialista, porque tiene mayoría absoluta.
- d. Ninguno tiene mayoría absoluta, por lo que se efectuarán nuevas elecciones hasta que un candidato

sea votado por mayoría absoluta, convocándose nuevas elecciones en caso contrario.

4. Es triste que en el primer debate sobre la aprobación de la Ley Ordinaria no exista quórum, por lo que el Presidente del Congreso de los Diputados suspende la sesión al no poder procederse a la votación. En la sesión en que debe votarse la Ley Orgánica asisten al Congreso de los Diputados 176 Diputados. ¿Podrá celebrarse en este caso la votación?

- a. No, porque no existe quórum.
- b. No, porque la Ley Orgánica exige mayoría absoluta y en este caso no puede obtenerse.
- c. Sí, aprobándose la Ley Orgánica con la mitad más uno de los votos de los asistentes.
- d. Sí, pero solamente podrá aprobarse la Ley Orgánica si existe el voto favorable de todos los asistentes.

5. Deplorable es la actuación del Diputado “difamador” y del agresor. Teniendo en cuenta sus derechos de inviolabilidad e inmunidad, ¿Cómo se deberá proceder penalmente?

- a. Penalmente no puede procederse, ya que se encuentran en el ejercicio de sus funciones.
- b. No podrá procederse penalmente contra el “difamador”, pero sí podrá ser procesado con la autorización del Pleno del Congreso de los Diputados el agresor.
- c. Ambos pueden ser detenidos, ya que ambos cometen un delito flagrante.
- d. Ambos pueden ser procesados, pero en todo caso con la autorización del Presidente del Congreso de los Diputados.

Soluciones:

1. C) *En este caso, la propuesta al Rey de disolución de las Cortes Generales y de convocar nuevas elecciones corresponde al Presidente del Gobierno; cuando no se logra elegir a ningún Presidente del Gobierno tras unas elecciones generales, la propuesta de disolución corresponde al Presidente del Congreso de los Diputados.*
2. C) *Corresponde a la Diputación Permanente las Cámaras cuando no están reunidas y asumir sus funciones cuando son disueltas o expira su mandato.*
3. A) *La mayoría absoluta son $350/2 + 1 = 176$ votos. Si el Congreso de los Diputados le otorga su confianza por mayoría absoluta a un candidato, será nombrado por el Rey. Si no alcanza la mayoría absoluta, se someterá la misma propuesta a votación 48 horas después, siendo suficiente la mayoría SIMPLE. Si tampoco se alcanza la confianza, se efectuarán otras propuestas de la forma expresada anteriormente. Transcurridos dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato adquiera la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.*
4. D) *En efecto, para que exista quórum se precisa la mitad más uno de los miembros que componen la Cámara, es decir, 176, y para aprobar la Ley Orgánica se precisa mayoría absoluta, es decir, 176 votos. Por lo tanto, puede celebrarse la votación y aprobarse la Ley Orgánica si los 176 Diputados votan afirmativamente.*
5. B) *El que intenta difamar al Presidente no comete delito alguno por su derecho a la inviolabilidad por sus manifestaciones en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto ni se le puede detener ni se le puede procesar. Al que da el cabezazo comete al menos un delito de lesiones, que es flagrante, por lo que puede ser detenido y posteriormente procesado en este caso con la autorización del Pleno del Congreso.*

Número 6.

Una vez que se han celebrado las elecciones generales, se constituye el Congreso de los Diputados y el Senado con los candidatos incluidos en las respectivas listas por los Partidos políticos, proporcionalmente a los conseguidos por cada uno de ellos. Hay dos partidos que han obtenido entre los dos el 90% de los votos, por lo que la elección de los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado se hace difícil, de forma que en una primera votación ninguno obtiene los votos suficientes para ser elegido.

Constituidas ambas Cámaras, se procede a la elección y nombramiento del Presidente del Gobierno y de sus Ministros. Tampoco en este caso se obtiene la mayoría absoluta en la primera votación, exigida para ser nombrado el Presidente del Gobierno, precediéndose a una segunda votación, donde tampoco se elige Presidente por obtener solamente la mayoría simple, siendo en una tercera votación, celebrada transcurridos tres meses desde la primera, donde por fin es elegido y nombrado Presidente por el Rey el candidato de la segunda lista más votada.

Una vez nombrado Presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados procede a la elección de los Ministros entre sus miembros, siendo nombrados por el Rey en la misma sesión parlamentaria en que se eligió al Presidente del Gobierno, con el refrendo de éste, quedando de esta forma constituido el Gobierno.

Transcurrido un año de gobierno, los grupos minoritarios, que entre todos suman 37 diputados, no están muy de acuerdo con la actuación del gobierno, que se ha aliado con el grupo mayoritario de la oposición y creen que entre los dos “se están repartiendo el bacalao”, por lo que deciden interponer una moción de censura en el mes de enero. No prospera la moción de censura, pero los parlamentarios minoritarios no se rinden y realizan las gestiones oportunas para conseguir apoyos de parlamentarios tránsfugas de los grupos mayoritarios para derrocar al gobierno y evitar el estado de corrupción que según ellos provoca la unión de los dos partidos mayoritarios. Al fin consiguen su propósito y prospera la moción de censura.

1. ¿Cómo se procederá para elegir al Presidente del Congreso de los Diputados y del Senado?

- a. El Rey, tras consultar con los grupos políticos con representación parlamentaria, nombrará al candidato que haya obtenido más votos.
- b. Será elegido entre los miembros de las Cámaras por mayoría absoluta en primera o segunda votación.
- c. Si en la primera votación no es elegido ninguno por mayoría absoluta, se convocará una segunda elección siendo nombrado el que obtenga la mayoría simple.
- d. En primera votación se elegirá al que obtenga mayoría absoluta y si ninguno la obtiene, se nombrará al candidato de los dos partidos mayoritarios que obtenga más votos en una segunda votación.

2. ¿Ves correcta la tramitación que se sigue en el nombramiento del Presidente del Gobierno, que precisa llegarse hasta una tercera votación?

- a. El Rey debe nombrar al candidato propuesto por el Presidente del Congreso de los Diputados, si obtiene la mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda votación.
- b. Debió ser nombrado Presidente en la segunda votación el candidato que obtuvo la mayoría simple.
- c. El candidato a Presidente del Gobierno lo propone el Rey, previa consulta con los grupos políticos con representación parlamentaria; no puede ser nombrado hasta la tercera votación, si no obtiene la mayoría absoluta en las dos anteriores.
- d. Según los datos del supuesto, se debió proceder por parte del Rey a disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones.

3. El nombramiento de los miembros del Gobierno la efectúa el Rey en la votación en la que se nombró al Presidente del Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados y con el refrendo del Presidente del Gobierno. ¿Correcto?

- a. Es falso, ya que el nombramiento de los Ministros corresponde al Rey, pero a propuesta del Presidente del Gobierno y fuera del arco parlamentario.
- b. Es correcto.
- c. Es correcto todo el proceso, excepto que los ministros son propuestos por el Presidente del Gobierno.
- d. Es correcto que los nombre el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, pero este acto debe ser refrendado por el Presidente del Congreso.

4. ¿Es correcta la interposición de la moción de censura por los grupos minoritarios?

- a. Puede ser interpuesta esta moción de censura, según los datos del supuesto.
- b. No es correcta por el número de parlamentarios que la pretenden interponer.
- c. No puede interponerse una moción de censura fuera del periodo de sesiones, como es el mes de enero.
- d. No es correcta la interposición ni por el número de diputados ni por el mes que eligen para interponerla.

5. ¿Cómo deberá actuarse con la segunda moción de censura interpuesta?

- a. Al prosperar la moción de censura, el Rey convocará nuevas elecciones.
- b. La segunda moción de censura no podrá presentarse hasta el mes de julio.
- c. Debe transcurrir al menos un año para poder interponer la nueva moción de censura.
- d. La segunda moción de censura podrá presentarse en cualquier momento, y si prospera, el Gobierno presentará la dimisión y el Rey nombrará como Presidente del Gobierno al que debe ir incluido en la moción de censura presentada.

Soluciones:

1. d) *El Presidente se elige por mayoría absoluta de los miembros de las Cámaras y, si ninguno la obtuviera, se repite la elección entre los dos que hayan obtenido más votos, siendo elegido el que obtenga más votos.*
2. b) *El candidato será propuesto por el Rey y elegido por los miembros del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta en primera votación o simple en las posteriores; si transcurren dos meses desde la primera votación sin ser nombrado ninguno, el Rey disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados. En este caso, se debió nombrar Presidente en la segunda votación.*
3. a) *En efecto, los Ministros son nombrados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, que por ello será el que refrende este acto, posteriormente y sin la intervención de los parlamentarios.*
4. a) *Para la interposición de una moción de censura se precisan al menos una décima parte de los diputados (35), que en este caso los hay; se puede interponer en cualquier momento, pero si se presenta entre periodos de sesiones, se imputará al periodo siguiente.*
5. b) *La primera moción de censura se presenta entre periodos de sesiones, por lo que se imputará al periodo siguiente (de febrero a junio) y no se puede interponer en el mismo periodo de sesiones, por lo que hasta julio no podrá interponerse. Si la moción de censura prospera, Presidente y Ministros del Gobierno presentarán su dimisión al Rey, que procederá a nombrar como Presidente del Gobierno al candidato incluido en la moción de censura.*

Número 7.

Establece el artículo 131 de la Constitución Española que “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.

La Ley que incluye los gastos e ingresos del sector público estatal es la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente al año 2008 no fue muy del agrado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que su Presidente como representante del Consejo de gobierno interpone ante el Tribunal Constitucional recurso de inconstitucionalidad. Es estimado este recurso, lo mismo que otros tres recursos interpuestos contra la misma Ley por el Defensor del pueblo, los cuarenta senadores de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la asamblea legislativa de la comunidad extremeña.

Por ello, el Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como representante del Consejo de su gobierno, presenta una iniciativa de reforma del Título 7º de la Constitución Española para cambiar el sistema de legislar sobre las haciendas públicas y así evitar la interposición de estos recursos, que siempre son estimados, lo que significa que existe ambigüedad en este tema.

1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, que regula todos los gastos públicos:

- Tiene carácter semestral y es elaborada por el Gobierno y aprobada por las Cortes Generales.
- Tiene carácter anual y es elaborada por el Congreso de los Diputados y aprobada por el Rey.
- La Ley de Presupuestos Generales del Estado debe ser elaborada por el Gobierno y aprobada por las Cortes Generales.
- La Ley de Presupuestos Generales del Estado, a iniciativa del Gobierno, debe ser elaborada por las Cortes Generales y aprobada por el Jefe del Estado.

2. La interposición del recurso de inconstitucionalidad debe realizarse ante el Tribunal Constitucional:

- Cuyo Presidente es el Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
- Sus 12 miembros son nombrados por el Rey, algunos de ellos a propuesta del Gobierno.
- Sus miembros deben ser en todo caso funcionarios públicos pertenecientes a la carrera judicial (Magistrados o Fiscales).
- Son correctas dos respuestas.

3. ¿Puede ser recurrida esta Ley de Presupuestos ante el Tribunal Constitucional?

- Sí, pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional las leyes estatales, las leyes autonómicas e incluso los Tratados internacionales.
- No, la Ley de presupuestos es una de las excepciones en el recurso de inconstitucionalidad.
- Sí, pero antes de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.
- Sí, este recurso se formulará en el plazo máximo de un mes desde la publicación de la ley recurrida en el Boletín Oficial del Estado.

4. Teniendo en cuenta quien puede interponer el recurso de inconstitucionalidad, según el artículo 162 de la Constitución Española, ¿es correcta la interposición de los recursos de inconstitucionalidad referidos en el supuesto?

- Es correcta la interposición de los cuatro recursos.
- Solamente es correcta la interposición del recurso por parte de la Comunidad Autónoma extremeña y el interpuesto por el Defensor del Pueblo.
- No es correcta la interposición del recurso por parte de los 40 Senadores catalanes.
- El Recurso de inconstitucionalidad solamente puede ser interpuesto por el Defensor del Pueblo y por Jueces, Magistrados y Fiscales.

5. ¿Actúa correctamente el Presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando presenta una iniciativa de reforma del Título VII de la Constitución Española para evitar la interposición de recursos?

- a. Sí, es una de las instituciones a quienes se les permite presentar directamente iniciativas de reforma constitucional.
- b. Pudiera ser correcta su determinación, si la reforma la hubiera solicitado a través del Gobierno o del Congreso.
- c. La reforma constitucional no puede ser propuesta por las instituciones autonómicas.
- d. En ningún caso el Consejo de gobierno andaluz puede solicitar la reforma constitucional.

Soluciones:

1. *c) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.*
2. *b) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es el Presidente del Tribunal Supremo, no el del Tribunal Constitucional. Dos de sus doce miembros son propuestos por el poder ejecutivo (el Gobierno) y sus miembros deben ser Magistrados, Fiscales o funcionarios públicos (no tienen que pertenecer a la carrera judicial) que sean juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional.*
3. *a) Todas las leyes y normas con fuerza de ley pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de tres meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, incluso en algunos casos este plazo puede ser de nueve meses, ampliables a seis más.*
4. *c) Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas, b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.*
5. *d) La reforma constitucional debe ser iniciada a propuesta del Gobierno de la Nación, del Congreso o del Senado; no obstante, se permite a las Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas (no a los Consejos de Gobierno) solicitar del Gobierno o del Congreso de los Diputados la propuesta de reforma constitucional.*

Número 8.

Un afamado abogado, que tiene abierto un bufete de abogados y en los más de 20 años que lleva ejerciendo como tal ha defendido varios casos de pleitos penales y civiles de trascendencia social e incluso política, es propuesto por el Gobierno para ser nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional, siendo aceptado y nombrado como tal por el Rey.

Es un jurista muy competente, pero se ha dedicado especialmente al Derecho penal y civil, dejando un poco al margen el derecho constitucional, por lo que ante su nueva situación intenta ponerse al día en materia constitucional y especialmente estudia el Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

Una vez que ejerce su función de Magistrado en el Tribunal Constitucional, se encuentra con una instancia de un Policía Nacional por la que solicita el amparo del Tribunal Constitucional, porque considera que se ha lesionado su derecho de sufragio activo y pasivo, regulado en el artículo 23 de la Constitución Española, por una disposición sin valor de Ley, emanada de la Cortes Generales.

Encuentra también otro escrito de un empresario interponiendo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al considerar lesionado su derecho a la propiedad privada y a la herencia, amparado por el artículo 33 de la Constitución, con una ley de transmisiones patrimoniales, aplicada estrictamente por el Juez de su localidad.

No corren buenos tiempos en la época en que este jurista es nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional, ya que el ambiente político y social se ha enrarecido tanto, que ha sido necesario declarar el estado de alarma en la comunidad catalana, el de excepción en la comunidad madrileña y el de sitio en la comunidad vasca.

1. ¿Cómo calificas el nombramiento de este afamado abogado como Magistrado del Tribunal Constitucional?

- a. Correcto en todos los sentidos.
- b. No puede ser propuesto como candidato a Magistrado del Tribunal Constitucional una persona que no pertenezca a la carrera judicial, con más de 15 años en el ejercicio profesional.
- c. Correcto en todos los sentidos, aunque el Gobierno sólo podrá efectuar esta propuesta a través de su partido político con representación parlamentaria.
- d. Además de ilegal, este nombramiento sería socialmente inmoral, por la injerencia que supone del poder ejecutivo en el poder judicial.

2. Son bastantes los conocimientos nuevos que el jurista encuentra en la sección 1ª del Capítulo II del Título I, que trata de los Derechos fundamentales y libertades públicas y que abarca del artículo 15 al 29, ambos incluidos, en los artículos que regulan los derechos fundamentales, pero solamente uno de los siguientes lo ha interpretado correctamente. Señálalo:

- a. En virtud del reformado artículo 15 de la Constitución, queda definitivamente abolida la pena de muerte.
- b. Del derecho de petición individual y colectiva, por escrito, que tiene todo ciudadano, quedan exceptuados los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar.
- c. El derecho a la libertad religiosa, según el artículo 16 de la Constitución Española, se encuentra en todo caso limitado por el respeto al orden público.
- d. Todo ciudadano gozará del derecho de reunión, previa autorización administrativa y debiendo comunicarlo a la autoridad gubernativa.

3. Es claro que con su instancia el Policía Nacional lo que pretende es interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se deberá actuar con esta pretensión del Policía?

- a. En este caso el Policía Nacional debería promover a través de la institución pertinente un recurso de inconstitucionalidad, no de amparo.
- b. La propuesta del Policía debe ser admitida y estudiada por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, que la Ley establece.
- c. Este caso se contempla dentro de los artículos que pueden dar lugar a un recurso de amparo, pero no puede ser admitido por la persona que lo interpone.
- d. Debe recurrir ante la jurisdicción ordinaria, ya que el derecho de participación política viene desarrollado por una Ley ordinaria.

4. Estudiemos el caso del empresario y la defensa de su patrimonio y veamos cual es la orientación que el Magistrado debería dar a su petición:

- a. En este caso el empresario debería promover a través de la institución pertinente un recurso de inconstitucionalidad, no de amparo.
- b. La propuesta del empresario debe ser admitida y estudiada por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, que la Ley establece.
- c. Este caso se contempla dentro de los artículos que pueden dar lugar a un recurso de amparo, pero no puede ser admitido porque el recurso de amparo no puede ser interpuesto directamente por una persona individual.
- d. Debe recurrir ante la jurisdicción ordinaria, ya que el derecho a la propiedad privada y a la herencia viene desarrollado por una Ley ordinaria.

5. El artículo 25.2 de la Constitución Española es muy importante en materia penitenciaria y se encuentra dentro de los llamados derechos fundamentales de los ciudadanos. Teniendo en cuenta la situación política existente en algunas Comunidades autónomas, contesta la respuesta correcta respecto a la suspensión o limitación de este derecho fundamental:

- a. Este derecho no podrá ser limitado ni suspendido en ninguna de las tres Comunidades autónomas aludidas.
- b. Este derecho podrá ser suspendido en las Comunidades autónomas madrileña y vasca y limitado en la Comunidad Autónoma catalana.
- c. Puede ser suspendido en la Comunidad Autónoma vasca y limitado en las otras dos Comunidades autónomas.
- d. Este derecho deberá ser suspendido en las tres Comunidades autónomas.

Soluciones:

1. a) *Dos de los Magistrados del Tribunal Constitucional deben ser propuestos por el Gobierno de la Nación y pueden serlo entre juristas de afamado prestigio con más de 15 años de antigüedad en el ejercicio profesional, como sucede en este caso.*
2. c) *La pena de muerte ha sido abolida por la Ley 11/1995, que modifica el Código penal militar, pero no el artículo 15 de la Constitución, que todavía contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte en su excepción “...salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Las fuerzas armadas están excluidos del derecho de petición colectiva, pero no la petición individual. Si la reunión no es en lugar público, no existe la obligación de la autorización administrativa ni de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.*
3. b) *Este derecho es uno de los derechos fundamentales y por lo tanto puede dar lugar a la interposición de un recurso de amparo por la persona afectada, incluidos los Policías. El supuesto establece que lo que se recurre es una disposición no de ley, por lo que no corresponde interponer un recurso de inconstitucionalidad (que admite disposiciones con rango de ley) ni requiere la intervención de la jurisdicción ordinaria al tratarse de una disposición que emana de las Cortes Generales.*
4. a) *Nos encontramos ante un recurso contra una Ley, lógicamente aprobada por el Gobierno, por lo que lo que procede es un recurso de inconstitucionalidad. Es cierto que este derecho es desarrollado por una Ley ordinaria, al no tratarse de un derecho fundamental, pero lo que el empresario recurre es el contenido de la Ley, no la interpretación de la misma por el Juez y por lo tanto, no procede la jurisdicción ordinaria ni el recurso de amparo.*
5. a) *No es este derecho uno de los contemplados en el artículo 55 de la Constitución Española, que recoge los derechos referidos a la libertad, tanto personal, como de movimiento o de prensa, pero no al resto de derechos fundamentales.*

Número 9.

En una Comunidad Autónoma del territorio español se producen una serie de incendios de tal magnitud que se hace prácticamente imposible la convivencia ordinaria en ese territorio, por lo que el Presidente de esa Comunidad Autónoma decide solicitar del Presidente del Gobierno que se declare el estado de alarma en toda su circunscripción. Examinada esta petición, se accede a ello, declarándose el estado de Alarma durante un mes. Como transcurre este mes sin que se hayan solucionado los problemas que provocaron la declaración de dicho estado, se prorroga el estado de Alarma por 15 días más.

La situación en la Comunidad Autónoma, lejos de solucionarse, va empeorando paulatinamente, de forma que es el propio Consejo de Ministros el que decide tomar cartas en el asunto e iniciar la tramitación necesaria para decretar el estado de Excepción en la Comunidad Autónoma, con la suspensión de determinados derechos fundamentales, ya que se hace prácticamente imposible la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La entrada en el conflicto de poderes fácticos, de carácter paramilitar y terrorista, hace que el Gobierno y la mayor parte de los españoles consideren que se está poniendo en peligro la integridad territorial de España, sin que la situación pueda resolverse por la declaración de los anteriores estados ni por otros medios, por lo que se decide declarar el estado de Sitio.

El estado de sitio consigue llevar la normalidad a este territorio autonómico, por lo que desaparece tal estado. Pero aún existen algunos elementos próximos a bandas armadas y terroristas, por lo que la Policía judicial, una vez localizada la vivienda donde puede ocultarse uno de estos elementos, intervienen las comunicaciones por teléfono y cuando se cercioran que evidentemente se trata de un integrante de una banda armada, irrumpe por la noche en su domicilio y le detienen, llevándolo a Comisaría y solicitando del Juez de Guardia de los de Instrucción que les permita interrogarle, ampliando el plazo de detención, hasta un máximo de diez días.

1. Cuando el Presidente de la Comunidad Autónoma decide, previa deliberación con su Consejo de gobierno, solicitar la declaración del estado de Alarma, deberá actuar de la siguiente forma:

- a. Puede decretar el Parlamento autonómico el estado de Alarma, ya que se circunscribe a su jurisdicción.
- b. Deberá solicitar al Gobierno que solicite del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de Alarma.
- c. Solicitará directamente al Gobierno que declare el estado de Alarma.
- d. Se dirigirá, a través de sus Diputados, al Congreso de los Diputados para que declare el estado de Alarma.

2. Cuando el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en este caso su Presidente, decide que se debe efectuar una prórroga, ¿cómo deberá actuar y por cuánto tiempo podrá solicitar otra prórroga?

- a. La primera declaración del estado de Alarma no puede superar los 15 días, ni tampoco la prórroga del mismo.
- b. Puede decretar el Parlamento autonómico la prórroga del estado de Alarma, ya que fue él quien lo decretó, pero deberá solicitar la previa autorización del Congreso de los Diputados.
- c. Puede solicitar la prórroga del estado de Alarma durante otros 30 días más.
- d. Se dirigirá, a través de sus Diputados, al Congreso de los Diputados para que declare el estado de Alarma.

3. Es lógico que una vez que se va complicando el mantenimiento del orden y la seguridad en la Comunidad Autónoma, intervenga directamente la Autoridad gubernativa estatal, pero ¿cuál será el proceso que deberá seguir?

- a. Decretará el Consejo de Ministros el estado de Excepción por un plazo máximo de 30 días, debiendo solicitar autorización del Congreso de los Diputados si considera prorrogar este plazo a 15 días más.
- b. No podrá decretar el estado de Excepción el Consejo de Ministros, sin la previa autorización del

Congreso de los Diputados; para la prórroga del plazo inicial seguirá la misma tramitación que para la primera declaración.

- c. La primera declaración será decretada por el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados; la prórroga deberá ser aplicada por el Congreso de los Diputados directamente, a propuesta del Gobierno.
- d. Tanto la declaración, como la prórroga deberá ser decretada por el Congreso de los Diputados, previa propuesta del Gobierno.

4. Mucho se han complicado las cosas, originadas simplemente por unos incendios, posiblemente provocados con la intención de llegar a la situación actual. Cuando el Gobierno teme que la situación pueda amenazar la integridad territorial de España, la actuación correcta debería ser:

- a. Proponer al Congreso de los Diputados que solicite del Jefe del Estado la declaración del estado de Sitio, ya que se trata de la declaración de un estado prebélico en una parte del territorio nacional.
- b. Es una de las circunstancias que se contemplan en la prórroga del estado de Sitio, por lo que solicitaría del Congreso de los Diputados autorización para declarar este estado.
- c. Debe proponer directamente al Jefe del Estado la declaración del estado de Sitio en la Comunidad Autónoma, especificando los derechos fundamentales que deben ser suspendidos.
- d. Es un caso claro de declaración del estado de Sitio, que corresponde decretarlo al Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, durante el periodo de tiempo que considere necesario.

5. ¿Cómo calificas la actuación de las fuerzas policiales con respecto al elemento terrorista, si en todo momento se ha solicitado la autorización judicial pertinente?

- a. Es correcta en todos sus extremos.
- b. No es correcta ninguna de sus actuaciones, ni con autorización judicial.
- c. Todo se ajusta a derecho, excepto el plazo de detención.
- d. Si no existe delito flagrante, no se puede autorizar el registro domiciliario. Tampoco se puede prorrogar la detención hasta diez días.

Soluciones:

1. c) *El estado de Alarma corresponde declararlo al Gobierno de la Nación mediante Decreto del Consejo de Ministros, por lo tanto el Presidente de la Comunidad Autónoma deberá dirigir al Presidente del Gobierno su solicitud.*
2. a) *El estado de Alarma solamente se puede decretar durante 15 días por Decreto del Consejo de Ministros, prorrogables a 15 días más también por Decreto, pero previa autorización del Congreso de los Diputados.*
3. b) *El Estado de Excepción lo declarará el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados, cuando el ejercicio de los Derechos y Libertades de los ciudadanos resulten tan gravemente alterados que con los poderes ordinarios no pueden ser restablecidos, por un plazo máximo de 30 días, prorrogables a otros 30 días. La prórroga también la decreta el Consejo de Ministros, previa autorización de Congreso de los Diputados.*
4. d) *El Estado de Sitio lo declarará el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno cuando se produzca o amenace producirse un acto de fuerza contra la soberanía de España, su integridad territorial o el Ordenamiento constitucional, siempre y cuando no pueda resolverse por otros medios. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.*
5. c) *En este caso, artículo 55.2 de la Constitución Española, la autoridad judicial podrá autorizar la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio y secreto de las comunicaciones, así como prorrogar la detención preventiva hasta 48 horas más. Se puede prorrogar la detención hasta 10 días en los estados de excepción y sitio.*